JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Julio veintitrés de dos mil veintiuno.

REF: TUTELA No. 1100131030272021-00293-00 de JUAN FRANCISCO AYALA COPETE contra FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA, vinculada a la SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA.

Se procede por el Despacho a decidir sobre la acción de tutela arriba referenciada con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES.

El señor JUAN FRANCISCO AYALA COPETE a través de apoderado. acude a esta judicatura solicitando la protección del derecho fundamental del debido proceso, al de igualdad y mínimo vital que considera están siendo vulnerados por los accionados.

En forma sintetizada se indica en los hechos que: laboro como docente al servicio del estado cotizando al sistema general de pensiones y una vez cumplidos los requisitos de edad y tiempo de servicio solicito ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación la cual le fue reconocida mediante resolución No.5506 del 07 de octubre de 2013.

Que mediante resolución No. 6673 del 9 de octubre de 2014 la Secretaria de Educación de Bogotá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó la revisión y ajuste de la pensión de jubilación.

Señala que mediante resolución No.3627 del 20 de junio de 2016 la Secretaria de Educación de Bogotá resolvió recurso de reposición interpuesto contra la resolución 3627 confirmándola.

Manifiesta que presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho mediante la cual solicito se declarara la nulidad de las resoluciones 6673 del 9 de octubre de 2014 y la resolución 3627 del 20 de junio de 2016 y se le reconociera el reajuste de la liquidación de pensión de jubilación con el 75% del promedio de todo lo devengado por el año anterior a la adquisición del status de pensionado, así como el reintegro y suspensión de los valores descontados por aportes a salud.

Dice que mediante solicitud radicada el 2 de agosto de 2017 solicito se diera cumplimiento al fallo judicial que ordena la revisión y ajuste de la pensión de jubilación. Señala que mediante resolución 245 del 20 de abril de 2020 las entidades accionadas indican que se da cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado 28 Administrativo ajustando la pensión de jubilación, reconocida al aquí accionante y a la fecha no se ha efectuado el correspondiente ajuste a la mesada pensional ni tampoco se ha efectuado la suspensión y reintegro de los descuentos para salud efectuados en las mesadas adicionales.

Refiere que mediante derechos de petición radicados ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de septiembre 16 de 2020, de septiembre 28 de 2020 y marzo 30 de 2021 y ante la Fiduciaria la Previsora derecho de petición del 22 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2020 y 5 de abril de 2021 y que a la fecha ninguna de las entidades han dado respuesta de fondo a la solicitud hecha ni han hecho ningún pago.

Solicita que a través de este mecanismo se proteja el derecho Al debido proceso, al de igualdad, al mínimo vital y se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria la Previsora S.A. de respuesta de fondo a los derechos de petición y se reliquide el valor de la mesada pensional reconocida y se vea reflejada en la nómina de la Fiduciaria la Previsora en el mes de agosto y así se logre el cabal cumplimiento al fallo judicial.

Admitido el trámite mediante providencia de julio 14 de 2021, se notificó la parte accionada quien dio respuesta así:

FIDUPREVISORA S.A.

En su respuesta indica que Una vez revisada la base de datos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se pudo establecer, que la resolución No. 2456 que ordena el pago de la prestación AJUSTE A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN que le fue reconocida al educador, se pondrá a disposición para cobro a partir del día 25 de julio de 2021 en el banco BBVA COLOMBIA - AGENCIA UNISUR.

Por lo que solicita DECLARAR el cumplimiento del fallo de tutela respecto a FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora de Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SECRETARIA DE EDUCACION

Refiere que Respecto a los derechos de petición presentados por el accionante, la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito se manifiesta de la siguiente forma: a. Frente al memorial radicado ante la Secretaría de Educación del Distrito el día 16 de septiembre de 2020 es importante resaltar que mediante respuesta emanada de la oficina de Talento Humano de la Secretaria de Educación, radicada al número S-2020- 151430 del 22 de septiembre de 2020, se informa a la apoderada del accionante de Tutela, el estado del trámite de la prestación, informando además que la prestación solicitada no se encuentra en las instalaciones de la SED puesto que fue enviado el expediente a la FIDUPREVISORA S.A. junto con la Resolución 2456 del 20/04/2020 para su respectivo ingreso a nómina, desde el 30 de abril de 2020.

Dice que Frente al memorial radicado ante la Secretaría de Educación del Distrito el día 28 de septiembre de 2020 es importante resaltar que mediante respuesta emanada de la oficina de Talento Humano de la Secretaria de Educación, radicada al número S-2020-162261 del 08 de octubre de 2020, se informa a la apoderada del accionante de Tutela, el estado del trámite de la prestación, informando además que la prestación solicitada no se encuentra en las instalaciones de la SED puesto que fue enviado el expediente a la FIDUPREVISORA S.A. junto con la Resolución 2456 del 20/04/2020 para su respectivo ingreso a nómina, desde el 30 de abril de 2020. Frente al memorial radicado ante la Secretaría de Educación del Distrito el día 30 de marzo de 2021 con el número de radicado E-2021-93189 que na vez recibida la solicitud de CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL, se asignó el número de radicación de prestaciones sociales 2017-PENS-470182, correspondiente a un FALLO CONTENCIOSO, del Sistema de Radicación Único de la Fiduciaria La Previsora S.A., en aplicación a lo establecido en el Decreto 2831 de 2005.

Que La Secretaría de Educación del Distrito profirió Resolución No. 2456 del 20 de abril de 2020, mediante la cual se DA CUMPLIMIENTO A UN FALLO CONTENCIOSO a favor del accionante JUAN FRANCISCO AYALA COPETE. y Revisado el aplicativo ONBASE de la entidad fiduciaria se observa que la prestación fue enviada para pago de nómina el 30 de abril de 2020.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000 .

Del caso Concreto:

Concurre a esta judicatura el señor JUAN FRANCISCO AYALA COPETE para que se protejan los derechos fundamentales ya indicados y se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria la Previsora S.A. de respuesta de fondo a los derechos de petición y se reliquide el valor de la mesada pensional reconocida y se vea reflejada en la nómina de la Fiduciaria la Previsora en el mes de agosto y así se logre el cabal cumplimiento al fallo judicial.

Con respecto a los derechos indicados como vulnerados, el **debido proceso administrativo**, la Corte ha dicho que este derecho es ante todo un derecho subjetivo, es decir, que corresponde a las personas interesadas en una decisión administrativa, exigir que la adopción de la misma se someta a un proceso dentro del cual se asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción, impugnación y publicidad. En este sentido, el debido proceso se ejerce durante la actuación administrativa que lleva a la adopción final de una decisión, y también durante la fase posterior de comunicación e impugnación de la misma.

El debido proceso administrativo, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión. En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional ha definido el **mínimo vital** como aquella porción del ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación, recreación, servicio públicos domiciliarios, etc. “Por ello, la misma jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo vital no sólo

comprende un componente cuantitativo, la simple subsistencia, sino también uno cualitativo, relacionado con el respecto a la dignidad humana como valor fundamente del ordenamiento constitucional²” Así, se tiene que la falta absoluta de este ingreso básico sitúa al ciudadano en una circunstancia excepcional, la cual no da espera a que se agote un largo proceso laboral ante la inminencia de un perjuicio irremediable, entendido como la imposibilidad manifiesta de cubrir sus necesidades mínimas y las de su núcleo familiar dependiente.

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados; pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ha sido superada, la decisión que dicte no tiene ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión del acusado.

De cara a lo solicitado en tutela, y teniendo en cuenta la respuesta dada por la parte accionada, el amparo impetrado no tiene prosperidad, por cuanto la Fiduprevisora S.A. indico que el ajuste a la pensión que le fue reconocida al accionante, se pondrá a disposición para cobro a partir del día 25 de julio de 2021 en el banco BBVA COLOMBIA - AGENCIA UNISUR.

Por tanto, lo pretendido por el accionante se ha cumplido ya que la parte accionada dio cumplimiento al fallo administrativo y por ende ha de negarse la tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: Negar la acción de tutela aquí promovida por **JUAN FRANCISCO AYALA COPETE** contra **FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUCIARIA LA PREVISORA**, y la vinculada **SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA**.

Segundo: Notifíquesele a las partes este fallo por el medio más expedito.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

JUEZ

JUZGADO 027 DE CIRCUITO CIVIL ESCRITURAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f9c2466ebffda1a23285f59e1c6d50512774bd090f4c5d21de1b4666e631a1a4**

Documento generado en 23/07/2021 06:56:46 AM